 <b>FISCALÍA</b> <small>GENERAL DE LA NACIÓN</small>	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código: FON-20-F-01
	ORDEN DE ARCHIVO		Versión: 01
Página 1 de 5			

Departamento: NORTE DE SANTANDER      Municipio: CHINACOTA      Fecha: 2018/10/10      Hora: 08:17

**1. Código único de la investigación:**

54	172	60	01220	2018	00027
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

8-63035288

**2. Delito:**

	Delito	Artículo
1.	LESIONES CULPOSAS	
2.		120 C.P.
3.		

**3. Indique la causal por la cual se ordena el archivo:**

ARTICULO 175 DE LA LEY 906 DE 2004, MODIFICADO POR EL ARTICULO 49 DE LA LEY 1453 DE 2011, SENTENCIA 1154 DE 2005 CSJ Y C-893 DE 2012.

**4. \* Datos de la víctima:**

DATOS DE LA VICTIMA // DENUNCIANTE									
Tipo de documento:		C.C.	X	Pas	C.E.	Otro	No.	5.534.699	
Expedido en Departamento:		NORTE DE SANTANDER				Municipio:		LOS PATIOS	
Nombres:		JESUS OMAR				Apellidos:		BARBOSA PARRA	
Lugar de residencia									
Dirección:		LOTE 63				Barrio:		SECTOR LA ESMERALDA	
Departamento:		NORTE DE SANTANDER				Municipio:		BOCHALEMA	
Teléfono:						Correo electrónico:			
DATOS APODERADO DE LA VICTIMA // DENUNCIANTE									
Nombres:						Apellidos:			
C.C.		T.P.				Dirección:			
Departamento:						Municipio:			
Teléfono:						Correo electrónico:			

**5. Fundamento de la orden (Relacione hechos, problema jurídico, actuación procesal y fundamento jurídico)**

Denuncia el señor JESUS OMAR BARBOSA PARRA, por LESIONES CULPOSAS, al señor HECTOR JOSE BECERRA QUINONEZ, hechos ocurridos el 9 de Septiembre de 2016, en esta Fiscalía Delegada, cuando informa que fue agredido cuando se transportaba como

parillero de la motocicleta conducida por el señor ELKIN OMAR CASTRO GAFARO, y una tractomóvil que se desplazaba en sentido contrario y al tratar de adelantar otro vehículo lo enviste, pues invade el carril por donde se transportaba la motocicleta causando lesiones en su humanidad, por lo que decide denunciar al señor HECTOR JOSE BECERRA como causante de las lesiones recibidas pues era quien conducía el vehículo que lo atropello.

Con miras a desarrollar el programa metodológico de la investigación, aclarar los hechos, establecer la materialidad de la infracción y demás presupuestos de ley identidad y responsabilidad del indiciado la víctima fue citada por escrito y vía telefónica pero con resultados negativos, hasta la fecha no se ha logrado su comparecencia y sin su participación y colaboración es poco probable sacar adelante la pretensión punitiva del estado en cabeza de la Fiscalía

El parágrafo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 dispone que la Fiscalía cuenta con un término máximo de dos años para formular la imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Tal norma es de procedimiento y tiene aplicación inmediata, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y 6 de la Ley 906 de 2004. No se trata de "actuaciones y/o diligencias" que estuvieren iniciadas o puestas que tal referente es frente a audiencias ya iniciadas, entrevistas, declaraciones o actuaciones específicas ya iniciadas más no frente a un caso, expediente o carpeta ya iniciado. Y la ley 2452 no consagra disposición especial que indicara que solo se aplicaría hacia el futuro.

La Honorable Corte Constitucional (sentencia T.181 del 23 de marzo de 1989, M.P. Fabio Morón Díaz) ha considerado que no corresponde al debido proceso una etapa investigativa sin término pues en el sistema procesal penal anterior fue declarado inexecutable el art. 324 del Decreto 2700 de 1991 que autorizaba la duración indefinida de la Investigación Previa (sentencia C412 del 28 de septiembre de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

La acción punitiva del Estado radicada en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, cuya actividad investigativa está dirigida a la constatación de la existencia de los hechos, la determinación de los motivos o circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito, a establecer la identificación e individualización y responsabilidad de los presuntos autores tendientes a lograr los cometidos estatales de búsqueda de verdad, la consecución de justicia, la protección y reparación integral de los perjuicios causados a la víctima, ultimo fin que implica igualmente, como imperativo verificar según lo advirtió la Corte Constitucional en su sentencia C-1154 del 15 de noviembre del 2005, M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, alude la Sentencia que *"al Fiscal le compete entonces efectuar una constatación fáctica sobre los presupuestos elementales para abordar cualquier investigación, lo que se entiende como el establecimiento de la posible existencia material de un hecho y su carácter aparentemente delictivo"*.

El artículo 79 del C.P.P. refiere al "ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS" por parte de la Fiscalía, el cual es **provisional** por si surgen nuevos elementos probatorios la indagación se reanuda mientras no haya extinguido la acción penal- esta norma hace alusión al análisis que debe hacer la Fiscalía sobre la existencia de los elementos de la tipicidad objetiva que han venido señalándose por la Honorable Corte Suprema de Justicia y que aparecen claramente detallados en el auto del doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS, de fecha 05 de julio de 2007, radicado 11-001-02-30-015-2017-0019, como supuestos en los que la Fiscalía puede aplicar la figura referida en cuanto a los sujetos, la acción, resultado y otros elementos como la relación de causalidad, el delito imposible, la conciliación en delitos querrelables, en delitos de omisión impropia o comisión por omisión cuando el sujeto no tiene calidad de garante.

No será posible realizar la constatación de elementos mínimos para el ejercicio de la acción penal cuando no se encuentren los sujetos pasivos o activo de la acción, en su sentido literal o por su sentido amplio y se queda el ente acusador sin una versión clara y detallada de los hechos, tampoco se encuentran con otros elementos de conocimiento, esto es, aquellos permitirían la verificación de las circunstancias fácticas de lo sucedido y también de las circunstancias subjetivas, así se discute que no son de resorte valorativo del Fiscal porque son juicios necesarios para el adecuado impulso de la investigación -la inferencia razonable de autoría para formular imputación-, la probabilidad de verdad sobre la existencia de hechos y que el imputado es su autor o participe -para acusar- y en el juicio superar la duda razonable a través de la prueba legalmente practicada que excluye como única la prueba de referencia con la dispensa de la víctima.


En la nueva sistemática penal de corte acusatorio no hay permanencia de la prueba es imperativo de la presencia activa de la víctima y/o testigos para cumplir con los principios de publicidad, inmediación y contradicción salvo, obviamente los casos excepcionales de prueba de referencia a que alude el artículo 437 del C.P.P. y, además conforme al artículo 381 de la misma obra establece el conocimiento requerido para condenar "para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, a cerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia".

El artículo 49 de la Ley 1453 del 2011, trata sobre la duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto al artículo 294 de este código. El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres (3) o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. La audiencia preparatoria deberá realizarse por el Juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. La audiencia de juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos (2) años contados a partir de la recepción de la noticia criminal para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Ese término máximo será de tres (3) años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se traten de investigaciones que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco (5) años.

En la Sentencia, 1154 de 2005 "La Corte Constitucional ha establecido que la razonabilidad del término de un plazo de investigación dentro del proceso penal debe estar condicionada por la naturaleza del término imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de sindicados y los efectos sociales que de esto se desprendan" y más adelante, "la previsión de la reanudación de la investigación busca también proteger a las víctimas estas, al igual que al Fiscal, en cualquier momento pueden aportar elementos probatorios orientados a mostrar la existencia de la tipificación objetiva de la acción penal o la posibilidad de su existencia, lo que de inmediato desencadenaría la obligación de reanudar la indagación".

Se ordena el ARCHIVO PROVISIONAL, de la actuación, decisión que no es de carácter definitiva, pues la Fiscalía no está renunciando al ejercicio de la acción penal, solo que, si el momento posterior a la evidencia varía o se recibe nueva información que amerite realizar otros actos de indagación y/o formular imputación se procederá a reabrir el caso y continuar con la indagación, siempre y cuando no haya prescrito la acción, se quiere significar, este archivo es de tipo administrativo no produce efectos ni reviste el carácter de cosa juzgada.



 <b>FISCALÍA</b> GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código: FGN-20-P-01
	ORDEN DE ARCHIVO		Versión: 01 Página 4 de 5

Para esta decisión se tiene en cuenta la Sentencia C-893 del 31 de octubre del 2012, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, mediante el cual fue declarado exequible el parágrafo único del artículo 49 de la Ley 1453 del 2011, modificadorio del artículo 175 de la ley 906 del 2004, en la cual la Honorable Corte Constitucional concluye lo siguiente: "en efecto la razonabilidad del plazo previsto en la *Convención Americana de los Derechos Humanos* y el *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos*, se establece en cada caso particular y ex post, atendiendo a factores como la naturaleza, las circunstancias y el nivel de complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración del mismo tipo de proceso, la conducta asumida por las partes y demás intervinientes, y la actuación comprendida por los operadores jurídicos encargados de sus sustanciación y definición.

....  
 "en ese contexto, concluye La Corte que la disposición controvertida, en la que se establece un plazo de dos, tres y cinco años a la fase de indagación preliminar, no vulnera los preceptos constitucionales alegados por el demandante por las siguientes razones:

En primer lugar, el establecimiento de límites temporales a esta fase de procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de La Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarla diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación; porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo pueda dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del C.P.P., y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello.

En segundo lugar, los términos de dos, tres y cinco años previstos en la disposición acusada, responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa".


A luz de lo señalado en la sentencia reseñada, al constatar la ausencia de los presupuestos mínimos requeridos para ejercer la acción penal se ordena el ARCHIVO PROVISIONAL del caso sin perjuicio de reanudar o reactivar la actuación a petición de parte o de manera oficiosa en el evento de surgir elementos materiales probatorios o información que desvirtúen el fundamento de este archivo, porque si la evidencia varía o se recibe nueva información que amerite realizar otros actos de indagación y/o formular imputación inmediatamente se procederá a reabrir el caso por la Fiscalía.

Se trata de una renuncia a la pretensión penal ni puede predicarse falta de investigación oportuna pues, consta, se trató de salvaguardar el debido proceso y el derecho a las víctimas de acceso a la justicia, a la verdad, a la justicia y la reparación.

Se tiene como fundamento el artículo 11, literal G de la ley 906 de 2004 y las sentencias C-1154 del 15 de noviembre de 2005, C-117-05, COMUNIQUESE, la presente orden al señor Delegado del Ministerio Público y a la víctima con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos.

#### 6. \* Personas respecto de quienes se archiva la actuación:

IDENTIFICACIÓN						
Tipo de documento:	C.C.	Pas	C.E.	Otro	No.	88.162.540
Expedido en	Departamento:		CUNDINAMARCA		Municipio:	UBATE
Primer Nombre	HECTOR		Segundo Nombre		JOSE	
Primer Apellido	BECERRA		Segundo Apellido		GUÍÑONEZ	
Fecha nacimiento			Lugar de nacimiento			

 <b>FISCALÍA</b> <small>GOBIERNO DE CHIRIQUÍ</small>	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código: FGN-20-F-01
	ORDEN DE ARCHIVO		Versión: 01 Página 5 de 5

Nombres del padre		Nombres de la madre	
Correo electrónico			
Lugar de residencia			
Dirección	Carrera 5 No. 13-26	Barrio	LA LEGUA
Municipio	UBATE	Departamento	CUNDINAMARCA
			o
		Telefon	3207680781
			o

7. Bienes Vinculados SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_

Descripción y Decisión
------------------------

## 8. DATOS DEL FISCAL

Nombres y apellidos		LUIS JAVIER MONROY VALBUENA	
Dirección:	CARRRERA 4 No. 8-17 BARRIO EL DIQUE	Oficina:	001
Departamento:	NORTE DE SANTANDER	Municipio:	CHINACOTA
Teléfono:	5884356	Correo electrónico:	
Unidad	FISCALIA UNICA CHINACOTA	No de Fiscalía	001

Firma,



LUIS JAVIER MONROY VALBUENA - FISCAL LOCAL

## 9. ENTERADOS

### VICTIMA // DENUNCIANTE

NOMBRE: JESUS OMAR BARBOSA PARRA

Documento de identificación: C.C. 5.534.699 DE LABATECA

## MINISTERIO PÚBLICO

NOMBRE: ILICH JAMAT JEFFET PAEZ CONTRERAS

Cargo: Personero Municipal

- En el evento de presentarse más víctimas o personas respecto de quien se archiva la actuación, proceda a copiar el cuadro completo a continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.

